

CUBA, ¿SUCESIÓN O TRANSICIÓN?

MARIFELI PÉREZ-STABLE

“EN EL NOVENTA, FIDEL REVIENTA”, REZABA UN POPULARÍSIMO cartel en Miami luego de la caída del muro de Berlín. En privado, no pocos en Cuba también pensaron que el ocaso era inminente. Pero no sucedió así. A mediados de los noventa los gobernantes cubanos respiraron aliviados: no sólo habían sobrevivido a la situación difícilísima que enfrentaron a principios de la década, sino que lo habían conseguido con un mínimo de reformas económicas y casi ninguna política. Bien hubieran podido desplomarse, o verse forzados a reprimir bárbaramente una Plaza Tiananmen cubana, o emprender una verdadera reestructuración de la economía a la China o Vietnam que los hubiera obligado a adoptar nuevas reglas del juego. En vez de ello, lo que ejecutaron fue una reconstitución política que la dirigencia espera que apoye una sucesión e impida una transición democrática después del velorio del comandante.

LA POLÍTICA EN CUBA: ¿MOVILIZACIONES O INSTITUCIONES?

A lo largo de más de cuatro décadas la dirigencia cubana ha recurrido a dos formas de gobernar: una movilizadora y la otra institucional.¹ La primera predominó en los sesenta cuando la Revolución aún conservaba su

¹ La bibliografía que trata el curso de las primeras tres décadas después de 1959 es vasta. Véanse, por ejemplo, los títulos siguientes que abarcan la temática de las etapas desde diferentes perspectivas: Carmelo Mesa-Lago, *Cuba in the 1970s: Pragmatism and Institutionalization*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1974; Jorge I. Domínguez, *Cuba: Order and Revolution*, Cambridge, Harvard University Press, 1978; Carolle Bengelsdorf, *The Problem of Democracy in Cuba*, Nueva York, Oxford University Press, 1994; Susan Eckstein, *Back from the Future: Cuba under Castro*, Princeton, Princeton University Press, 1994; Marifeli Pérez-Stable, *The Cuban Revolution: Origins, Course, and Legacy*, segunda edición, Nueva York, Oxford University Press, 1999.

brillo y la mayoría de los cubanos habían abrazado sus ideales. La creación del llamado hombre nuevo –para el cual la patria valdría más que los intereses terrenales– impulsó las movilizaciones a los campos para cortar caña y a la plaza para escuchar a Fidel. El socialismo cubano no se enquistaría como el de la Unión Soviética y Europa del Este: fomentaría una nueva conciencia popular y asentaría una sociedad basada en la solidaridad. “¡Los diez millones van!”, proclamaban vallas a lo largo y ancho de la isla, refiriéndose a las toneladas de azúcar que se producirían en 1970. Pero eso tampoco sucedió. La zafra fue de 8.5 millones y los cubanos –al decir de Carlos Rafael Rodríguez, líder del viejo Partido Comunista de Cuba (PCC) y dirigente destacadísimo después de 1959– manifestaban una “resignación de apoyo” que poco tenía que ver con la conciencia solidaria que se buscaba.² La política de movilizaciones descalabró la economía, subvirtió la institucionalidad y, sobre todo, malgastó la buena voluntad y la confianza –sin precedentes en la historia de Cuba– que el pueblo le había brindado a la Revolución. La dirigencia se vio obligada a cambiar de rumbo.

En los setenta surgió el modelo “institucional”, aunque, con Fidel Castro a la cabeza, la institucionalidad siempre será precaria. Pero no debe menospreciarse el saldo positivo que, con respecto a los sesenta, le representó al cubano común, por la mejoría de los estándares de vida y la relación de las presiones movilizadoras. La vida diaria fue adquiriendo un cierto orden gracias a la adopción de lo que Rudolf Bahro llamara el “socialismo real y existente”. Por primera vez, la economía fue sometida a las normas de planificación otrora vigentes en el campo socialista que, si bien plagadas de fallas insuperables, introdujeron un sistema en donde había reinado el caos. El PCC se organizó según el patrón de sus homólogos en el poder en aquellos tiempos, amplió su militancia de unos 100 000 a más de 500 000 y celebró su primer congreso en 1975. Las organizaciones de masas –tales como los sindicatos, la Federación de Mujeres, las de los campesinos y los estudiantes o los comités de barrio– también regularizaron su funcionamiento, ampliaron el número de afiliados y convocaron a congresos. A mediados de la década, se constituyeron las asambleas del Poder Popular (cuasi legislaturas). La nueva institucionalidad no admitía, claro está, un toma y daca democrático, pero sí era más comprensiva que la heterodoxia revolucionaria de los sesenta: no le exigía la heroicidad diaria al cubano de a pie. La institucionalización, es cierto, fue una especie de soviétización, ya que se asumió el modelo imperante entonces, pero no en su totalidad. Fidel Castro no se acoplaba del todo al nuevo orden, aun-

² Frase dicha a la autora el 6 de junio de 1984 en respuesta a una pregunta sobre los años sesenta.

que ya no gobernaba exclusivamente por cuenta propia, sino que comenzó a hacerlo también a partir de la institucionalidad incipiente.³ A su manera, Cuba parecía encaminarse hacia una normalidad socialista.

Cuando los berlineses derrumbaron el muro, ya La Habana se había alejado de ese derrotero. A mediados de los ochenta, la dirigencia –alarmada por el viraje que Mijail Gorbachov le daba a la Unión Soviética y el hecho de que la mayoría de los cubanos se preocupara más por satisfacer sus necesidades cotidianas que por los ideales revolucionarios– retomó la brújula de los sesenta. Una cierta liberalización de la economía –por ejemplo, mercados campesinos, ferias de arte y artesanías, trabajo por cuenta propia y un mercado inmobiliario– había abierto nuevas nuevas oportunidades de ganar y gastar más, y la población las aprovechaba con creces.⁴ Cuando se planteó la necesidad de profundizar las relaciones mercantiles, Castro retomó el tema de la conciencia. En 1986, se abortó la modesta liberalización, se clausuraron mercados y se proclamó la política de “rectificación de errores y tendencias negativas”.

Si bien reavivó el repudio al socialismo de mercado, la rectificación no desestimó las instituciones políticas y sociales de los setenta. El giro pretendía corregir las desviaciones de la “década perdida” (1976-1986), calificativo que resalta una verdad chocante: la cúspide cubana nunca le ha concedido al bienestar terrenal de los mortales una sostenida y debida prioridad. ¿Cómo explicar si no que unos políticos desdeñen así el periodo post-1959 que mayor provecho material le ha representado a la población? De hecho, la rectificación coincidió con una recesión y un descenso de los estándares de vida. Fidel Castro y el sector de la clase política más allegado a él siempre han recelado a ultranza de la normalidad socialista –bien en la desaparecida variante de Europa del Este o la adoptada por China y Vietnam. Ambas colocaron el progreso material y no la ideología en el centro de la política: los llamados de János Kádár en Hungría después de 1956 (*Let's eat sausage!*) y de Deng Xiaoping en China (¡A enriquecerse!) fueron emblemáticos de los nuevos rumbos. Castro era y es incapaz de convocar a la ciudadanía sobre una plataforma de “pan con lechón” para todos.⁵

Así y todo, las iniciativas de Gorbachov encontraron acogida en amplios sectores de la *intelligentsia* e, incluso, de la nomenclatura. La rectifica-

³ Jorge I. Domínguez, “Revolutionary Politics: The New Demand for Orderliness”, en Jorge I. Domínguez (ed.), *Cuba: Internal and International Affairs*, Beverly Hills, Sage, 1982, pp. 19-70.

⁴ Carmelo Mesa-Lago, “The Cuban Economy in the 1980s”, en Sergio Roca (ed.), *Socialist Cuba: Past Interpretations and Future Challenges*, Boulder, Westview Press, 1988, pp. 59-100.

⁵ Marifeli Pérez-Stable, “Caught in a Contradiction: Cuban Socialism between Mobilization and Normalization”, *Comparative Politics*, octubre de 1999, pp. 63-82.

ción —o la ratificación de errores, como se le llamaba popularmente— ofrecía fórmulas manidas y fracasadas, senderos trillados sin otro paradero que el mismo callejón sin salida. El socialismo se agotaba no sólo en Europa del Este, también en la isla, aunque allí sus orígenes fueron autóctonos y, por tanto, portadores de una legitimidad no del todo erosionada. Empero, la dirigencia se empeñaba en gobernar como si el pueblo de fines de los ochenta fuera el mismo de 1959 cuando la Revolución gozaba de un apoyo extraordinario. Aunque el cubano tenía su propio imprimátur, compartía con el “socialismo real y existente” unas estructuras económicas y políticas que también se habían enquistado. Los años sesenta proclamaron una utopía pero, al menos al principio, no fueron pocos los cubanos que se afanaron por ella y los que luego lamentaron su fracaso. En los ochenta no eran muchos los que aún creían como antes y los demás lamentaban la tozudez de la dirigencia ante la realidad. La posterior desaparición de la Unión Soviética agravó sensiblemente la crisis pero de ninguna manera la ocasionó. La depauperación del socialismo cubano había comenzado con anterioridad a 1989.

Ante la incertidumbre y el desasosiego que el fin de la Guerra Fría desató en Cuba se develaron propuestas cuyo norte fueron la glásnost y la perestroika. Nada sorprendentemente, la máxima instancia las desestimó. El conjunto de estas propuestas hubiera conformado una alternativa más atenta al cubano de a pie y al futuro del país que el camino tomado. A saber, éstas fueron: la legalización de las pequeñas y medianas empresas nacionales, la separación de funciones con el nombramiento de diferentes titulares en la presidencia y la secretaría general del PCC, así como la creación del cargo de primer ministro, la integración de algunos opositores a la Asamblea Nacional del Poder Popular y el cambio de nombre del partido único al de Partido de la Nación Cubana.

Era un conjunto más bien simbólico, pero no insustancial. Las pequeñas y medianas empresas hubieran creado fuentes de empleo —condición imprescindible para estilizar el inflado sector estatal que sigue abrumando la eficiencia económica— y potenciado las enormes reservas empresariales de los cubanos a favor del tan lastimado consumo básico de bienes y servicios. Con la separación de funciones se hubiera dado un modestísimo paso para aplacar lo inadmisibile: que un solo hombre haya monopolizado las cumbres del poder durante décadas sin más coto que su muerte. Una docena de opositores en el parlamento no hubieran puesto en peligro al Estado cubano y le hubieran dado colorido a sus discusiones soporíferas. Lo del Partido de la Nación Cubana sugería una especie de PRI que no hubiera sido gran cosa, cierto, excepto que ahora en México el presidente es del PAN.

Tan sólo una aplicación parcial de estas reformas hubiera favorecido un ambiente internacional menos tenso y de mayor beneficio para Cuba. Era lo que perseguían la España de Felipe González y las primeras Cumbres Iberoamericanas a principios de los noventa: que el propio Fidel Castro condujera la transformación hacia un nuevo patrón de desarrollo más acorde con las nuevas realidades nacionales e internacionales. Además, una Cuba que hubiera dado indicios de apertura real le hubiera dificultado –quizás no impedido– a los Estados Unidos el reforzamiento del embargo que se dio con las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996). Las pequeñas y medianas empresas y la inclusión de opositores en la Asamblea Nacional, por ejemplo, podrían haber posibilitado la política de “pasos calibrados” que nunca cobró vida en el primer mandato de Bill Clinton.

Las reformas desestimadas hubieran retomado la variante cubana de la normalidad socialista que la rectificación desplazó. Ciertamente, no había garantías de que el resultado fuera como en China, donde los comunistas reforzaron su poder, y no como en Europa del Este, donde lo perdieron. Cualquiera de los dos escenarios, sin embargo, entrañaba un cambio de las reglas del juego político: el Partido Comunista chino hoy gobierna atento a la economía hasta el punto de abrirle sus filas a los nuevos empresarios; en los países del difunto campo socialista los comunistas, reciclados como socialdemócratas, no son ajenos al poder porque han sabido ganar elecciones. Empero era ese cambio de reglas el que Castro y sus más allegados querían evitar a toda costa. Lo lograron. La reconstitución política –un gatopardismo caribeño que les permitió “cambiar” para que todo siguiera (casi) igual– contuvo la crisis económica y ha trazado un anteproyecto de sucesión. ¿En qué ha consistido, pues, esta reconstitución?

CUBA EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

A principios de los noventa, la sobrevivencia era el objetivo vital y dos factores la avalaron. El primero giró en torno a la economía: luego de contraerse de 35 a 50% entre 1989 y 1993, ésta ha recuperado un ritmo de crecimiento modesto. A principios de la década, el gobierno adoptó reformas a contrapelo de los postulados revolucionarios que facilitaron la recuperación –la legalización del dólar, la liberalización de las cooperativas agrícolas, la autorización del empleo por cuenta propia en un número restringido de actividades y la apertura a las inversiones extranjeras.⁶ Fue un

⁶ Jorge Pérez-López, *Cuba's Second Economy: From Behind the Scenes to Center Stage*, Nueva Brunswick, Transaction Publishers, 1995; Julio Carranza Valdés, Luis Gutiérrez Urdaneta y

trago amargo pero indispensable para retener el poder y sólo en aras de ese fin se aceptaron sus costos: una disminución del control estatal de la economía, un número creciente de ciudadanos que se ganaban la vida por cuenta propia (legal o ilegalmente), un aumento de las desigualdades sociales y, sobre todo, el que la *intelligentsia* y sectores de la élite gobernante otearan otros horizontes. O se ampliaban las reformas o se detenían: era una coyuntura parecida a la que antecedió a la rectificación, excepto que ahora también se proponía una cierta apertura política. La decisión fue la misma que en 1986, salvo que esta vez no se retractaron las medidas mercantiles. A mediados de 1995, Castro le dio el toque de queda a la liberalización: "Toda apertura nos ha traído riesgos. Si hay que hacer más reformas, las haremos. Por el momento, no son necesarias."⁷ Desde entonces, el gobierno ha hecho malabarismos para contener lo que, quizás más temprano que tarde, parece ineludible: una verdadera reestructuración económica. Mientras tanto, el haber sobrevivido lo peor de la crisis le permitió a la dirigencia reconstituir el sistema político sin mayores alteraciones.⁸

La sobrevivencia fue igualmente impulsada por un conjunto de factores políticos. El primero fue la cohesión que la élite mantuvo entre sí. La magnitud de la crisis bien podía haber causado un quiebre por diferencias sobre cómo enfrentarla. Pero, con Fidel Castro a la cabeza, cerraron filas, aun cuando la mayoría probablemente hubiera preferido el conjunto, o una parte, de las reformas descartadas. Además, la composición de la dirección del PCC, del Estado y del gobierno alcanzó una mayor representatividad generacional, regional, étnica y de género.⁹ Asimismo, la dirigencia ha puesto de manifiesto inequívocamente su determinación de retener el poder: a las buenas, porque la abrumadora mayoría supuestamente la reconoce como la única alternativa para salvaguardar "la Patria, la Revolución y el socialismo"; o a las malas, rompiendo cabezas, según el decir de un general a principios de los noventa.¹⁰ Ante el "maleconazo" del 5 de agosto

Pedro Monreal González, *Cuba, la reestructuración de la economía: una propuesta para el debate*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1995; Carlos Solchaga, "Cuba: perspectivas económicas", *Encuentro de la Cultura Cubana*, núm. 3, invierno, 1996-1997, pp. 43-53.

⁷ *Cuba en el Mes*, septiembre de 1995, p. 6.

⁸ Para una mejor comprensión de la necesidad de la reforma política desde diferentes puntos de vista, véase Jorge I. Domínguez, "La democracia en Cuba: ¿cuál es el modelo deseable?", y Haroldo Dilla, "Cuba: ¿cuál es la democracia deseable?", en Haroldo Dilla (ed.), *La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos*, La Habana, Ediciones CEA, 1995, pp. 117-129 y 169-189.

⁹ Véase Pérez-Stable, *The Cuban Revolution...*, *op. cit.*, capítulos 7 y 8.

¹⁰ La frase es del general Sixto Batista, al emitirla, presidente de los Comités de Defensa de la Revolución, citado en *El Nuevo Herald*, 7 de septiembre de 1993.

de 1994, cuando miles de habaneros se concentraron en el malecón en franco y militante desafío a las autoridades, el régimen ostentosamente movilizó las tropas especiales del Ministerio del Interior (Minint). Aunque finalmente fueron las notorias Brigadas de Respuesta Rápida las que dispersaron el motín, el mero hecho de haber desplegado a simple vista las fuerzas del Minint subrayó la voluntad de dar la orden de disparar.¹¹

Aunque tímidas e insuficientes, las reformas económicas le concedieron una función a las relaciones mercantiles y, por ende, tácitamente se admitió la incapacidad de la economía socialista para afrontar la crisis por sí sola. No pasó igual con el sistema político: la cúspide se aferró al unipartidismo y al discurso unitario pese a que, obviamente, le quedaran cortísimos a una sociedad que a todas luces necesitaba del pluralismo para renacer. En contraste con la economía, la política ha seguido rigiéndose más o menos por las mismas reglas. La habilidad de combinar menudas reformas económicas con el gatopardismo político es un segundo factor que favoreció la sobrevivencia. Como la económica, una tímida e insuficiente apertura política también hubiera acarreado costos que eran inadmisibles si se trataba de defender el *statu quo*—por ejemplo, facciones abiertas en el liderazgo, pluralismo en las asambleas del Poder Popular, demandas de transparencia en los medios de comunicación, autonomía de las organizaciones de masas. Tampoco, sin embargo, se podía seguir exactamente igual y por eso se dieron algunos cambios cosméticos: entre ellos, la admisión de los creyentes en el PCC, la elección directa de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y el reconocimiento constitucional al sector mixto de la economía. La elección directa, ejercida por primera vez en 1993, fue aclamada oficialmente como una suerte de referéndum que ratificó el apoyo popular.¹²

¹¹ La concentración fue motivada por el rumor de que se aproximaban embarcaciones para recoger pasajeros al azar y llevarlos a la Florida. Es decir, no hubo una motivación política, si bien se lanzaron consignas antigubernamentales. Fuentes oficiales admitieron 35 heridos y 700 detenidos. La manifestación duró la mayor parte del 5 de agosto de 1994. A principios de la década, el gobierno había creado las Brigadas de Respuesta Rápida, integradas por obreros de los llamados Contingentes de la Construcción con destrezas físicas e incondicionalidad política excepcionales. Las Brigadas son fuerzas de choque estrechamente ligadas al Minint.

¹² En diciembre de 1992, la primera rueda eligió a los delegados municipales que siempre habían sido electos por voto directo. Según fuentes no oficiales, hasta un tercio del electorado anuló la boleta o la entregó en blanco. El gobierno se sorprendió y tomó medidas para impedir que la elección de los diputados nacionales y provinciales—que sí se sometían al voto directo por primera vez—arrojara resultados similares. Éstas incluyeron una campaña incesante a “votar por Cuba”, visitas a los hogares para “instruir” a los electores sobre la votación y

La relativa quietud de la ciudadanía también contribuyó a que el gobierno no naufragara en los mares revueltos de principios de los noventa. Inicialmente, la Revolución se afincó sobre un amplio y genuino apoyo popular. Aunque luego mermó, hasta fines de los ochenta la dirección contaba con la disposición de muchos a escuchar sus directrices. Así se puso en evidencia en 1990, cuando convocó a la población para discutir el llamamiento al congreso del PCC que se celebraría al año siguiente. Anunció que las asambleas serían una "consulta real" y en ese espíritu los ciudadanos respondieron: se expresaron, en público y en voz alta, como nunca lo habían hecho después de 1959. Transmitieron un mensaje clarísimo –apertura y liberalización– pero fue desoído: según la lectura oficial, las asambleas demostraron un apoyo unánime al "Partido, la Revolución y el compañero Fidel". Aunque un sector de la élite también apoyaba reformas de peso, lo que finalmente se dictó fue modesto en lo económico y cosmético en lo político. Una adopción parcial de las reformas rechazadas –especialmente las económicas– hubiera reconocido lo expresado en las asambleas y quizás renovado, si no el apoyo, al menos la disposición ciudadana a escuchar al gobierno. Pero la dirigencia prefirió defender su poder con la ideología en el centro de la política que modificarlo dándole la debida prioridad al progreso material del cubano común y corriente. El que el "maleconazo" no se haya repetido le ha permitido a los gobernantes sostener la pantomima de un apoyo mayoritario. Simulan que aún gozan de la buena voluntad y la confianza del pueblo, cuando en realidad se han asentado sobre el temor y la desesperanza de la mayoría.

Una vez asegurada la sobrevivencia, la dirección se volcó sobre la reconstitución política. Lo primero fue preparar el congreso del PCC para 1997. A diferencia del anterior, este cónclave no dejó ninguna rendija abierta al cambio: fue una reafirmación de lo que había sido la heterodoxia cubana frente a la Unión Soviética pero que, ahora, se develaba conservadora, si bien con modestas concesiones económicas y con un énfasis institucional ajeno a la década del sesenta. El congreso ratificó la tendencia antimercado, sin revertir las aperturas de 1993, y le subió el tono a lo que se dio en llamar "la ideología de la Revolución Cubana". La composición del Comité Central subrayó la importancia de la maquinaria política para la reconstitución. En 1991, 35% de sus miembros fueron ciudadanos sin cargos oficiales en el PCC, el Estado, el ejército y las organizaciones de masas. Se trataba de personas que se desempeñaban directamente en la producción y los servicios y, por tanto, sus responsabilidades principales no

una súbita revisión de los registros electorales. En febrero de 1993, el porcentaje de boletas anuladas o en blanco se redujo a 7.2 (fuentes oficiales) o entre 10 y 20 (fuentes no oficiales).

eran de dirección o control políticos. Llamó la atención entonces ese esfuerzo por “desprofesionalizar” la máxima instancia del partido. En 1997 este sector se redujo a menos de 13%, mientras que la representación de los funcionarios partidistas y del Estado, así como la de los militares, aumentó notablemente. Lo innovador cedió ante las exigencias de resguardar el poder.¹³

El congreso de 1997 selló el retorno político al pasado. Si bien la sociedad y la economía habían ya emprendido una cierta transición, el sistema político se reconstituía sin cambios notables. Desestimadas las propuestas aperturistas, ¿qué alternativa había sino volver a las raíces? Al igual que la rectificación en su momento, la reconstitución ha entrelazado la institucionalidad con una política movilizadora. Por una parte, la dirigencia le ha prestado una atención, inusitada desde los años setenta, a las instituciones. A partir de 1999, se han celebrado con regularidad frecuente asambleas provinciales del partido con la presencia de Raúl Castro o con la de otros miembros del Buró Político y de la alta oficialidad militar. Asimismo, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y las asambleas municipales del Poder Popular se han reagrupado. El partido renovó su militancia: el 51% de ella se incorporó durante los noventa. La dirigencia ha buscado reafirmar lo que en Cuba se entiende por política y reforzar las instituciones que avalan –y podrían avalar– el poder. Luego de la incertidumbre de principios de los noventa, se ha regresado a una aparente normalidad.

La reconstitución, sin embargo, se había dado sobre una especie de acuerdo tácito con la población. Durante casi toda la década, las demandas políticas no habían sido tan exigentes como antes y se había dado una media tregua en las movilizaciones de apoyo. Pero entonces Elián González arribó a las costas de la Florida y la campaña desatada para lograr su retorno hizo revivir la política de masas reminiscente de la de la década de los sesenta. La reunificación del niño con su padre tuvo cierta resonancia popular y, al menos al principio, las movilizaciones expresaron sentimientos genuinos en pro de ésta. Elián, sin embargo, rápidamente fue convertido en plataforma política contra la “mafia” de Miami y la dirigencia no tardó en anunciar un nuevo frenesí movilizador bajo el lema de la “Gran Batalla de Ideas”. Desde entonces, noche tras noche la televisión transmite mesas redondas sobre temas tales como la política migratoria de los Estados Unidos, la globalización, la condena a Cuba por la Comisión de Derechos Hu-

¹³ El giro conservador se avizoró en una serie de artículos, “El trabajo del Partido en la coyuntura actual”, publicada en *Granma* en agosto de 1996.

manos en Ginebra y, más recientemente, el caso de los cinco cubanos condenados por espionaje en los Estados Unidos.¹⁴ Casi todos los sábados se convoca a la ciudadanía a una plaza de algún pueblo o ciudad para una supesta Tribuna Abierta de la Revolución. Las movilizaciones en la Plaza de la Revolución o a lo largo del malecón habanero están a la orden del día. Brigadas de Vigilancia Revolucionaria, integradas por jóvenes portadores de teléfonos móviles, recorren la isla de punta a cabo, velando y reportando. En todos los municipios de La Habana se crearon las llamadas Comisiones de Fidelidad.¹⁵ Un apodado “Juramento de Baraguá” –alusivo a la rebeldía del general Antonio Maceo ante el acuerdo que concluyera sin éxito el esfuerzo independentista de la Guerra de los Diez Años (1868-1878)– se hizo circular en fábricas y barrios, escuelas y oficinas, comprometiendo a los firmantes a defender el honor de la patria hasta sus últimas consecuencias.¹⁶

En junio del 2002 la escalonada fue aún mayor. El gobierno convocó manifestaciones como pocas en 43 años a favor de una reforma constitu-

¹⁴ A principios de junio de 2001, cinco miembros de la “Red Avispa” fueron declarados culpables de los 23 cargos de espionaje presentados por las autoridades en un juicio realizado en Miami. Ninguno de los 12 miembros del jurado era cubanoestadounidense. La red constaba de diez miembros; cinco colaboraron con las autoridades federales en la convicción de los otros cinco. Lo más significativo del fallo legal fue la evidencia irrefutable de que La Habana había decidido derribar las avionetas de Hermanos al Rescate la próxima vez que volaran en el espacio aéreo cubano: dos de los agentes que habían infiltrado en dicha organización fueron prevenidos de no volar a fines de febrero de 1996. El 24 de ese mes dos avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas en el espacio aéreo internacional, según lo dictado posteriormente por la Organización Internacional para la Aviación Civil, una dependencia de las Naciones Unidas presidida entonces por Canadá. Los cuatro tripulantes murieron y ahora se puede decir con propiedad jurídica que fueron asesinados. En marzo de 1996, el presidente Clinton firmó la ley Helms-Burton.

¹⁵ Las Comisiones nacen por iniciativa del Grupo de Apoyo al Comandante en Jefe, una entidad creada a principios de los ochenta que, como su nombre lo indica, responde directamente a Castro. Su primera encomienda es reducir la corrupción y le han encargado a los Comités de Barrio que levanten un inventario de posibles actos ilegales: arrendatarios de viviendas que evadan o no paguen la totalidad de los impuestos correspondientes; vendedores ambulantes de leche, huevos y otros comestibles; fabricantes de helados, batidos y durofríos; cuentapropistas sin las debidas licencias, etc. La creación de las Comisiones subraya la extensión de la corrupción (o lo que en Cuba se considera como tal) y la preocupación que Castro tiene por la misma.

¹⁶ Evidentemente, el gobierno invierte una cantidad desconocida de recursos en estas campañas y movilizaciones. Dada la empobrecida economía y las carencias cotidianas, el desvío de medios y la pérdida de días laborales representan un costo político. El periódico *Granma* (3 julio de 2000) mencionó el delicado tema de los recursos desviados a “las batallas” y dijo: “Son en realidad mucho menores de lo que puedan parecer y está perfectamente a nuestro alcance, sin sacrificar nada esencial.”

cional que declarara la irrevocabilidad del socialismo. Luego le siguió una ofensiva para recoger firmas de apoyo a la iniciativa: se abrieron 129 523 puntos de acceso para firmar y casi la totalidad de los electores (99.7%) la suscribieron. Por último, la Asamblea Nacional discutió la propuesta durante tres días –declarados festivos para que el pueblo siguiera de cerca las sesiones transmitidas en vivo– y la aprobó unánimemente. Aunque la administración de Bush y una renovada demanda de que La Habana celebrara elecciones libres bajo supervisión internacional fue el pretexto de la campaña, el impulso se lo habían dado el Proyecto Varela y la visita del ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter.¹⁷

Del 12 al 17 de mayo, Carter había viajado a Cuba con un doble propósito: abogar por el mejoramiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, y proclamar los valores de la democracia. Y así fue. Por una parte, el ex mandatario declaró que el primer paso para aliviar el “estado de beligerancia” entre los dos países lo deberían dar los Estados Unidos por ser la nación más poderosa, al mismo tiempo que afirmó que las restricciones que implica el embargo “no son la causa de los problemas económicos de Cuba”. Su defensa de la democracia fue clara y puntual; incluso sugirió que ésta pudiera ser garante de la soberanía nacional: “Cuando los cubanos ejerzan este derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá cómo son los cubanos y no los extranjeros quienes decidirán el futuro de este país.”¹⁸

En su discurso, Carter mencionó el Proyecto Varela y los incisos de la Constitución actual que avalan el derecho ciudadano a proponer cambios en el orden jurídico por medio de una petición (con un mínimo de 10 000 firmas) presentada ante la Asamblea Nacional, que es la que tiene la facultad constitucional de decidir si procede una consulta popular al respecto. Unos días antes del arribo de Carter, Oswaldo Payá Sardiñas y otros varelistas le habían entregado a la Asamblea una petición suscrita por más de 11 000 personas. Esta consta de cinco elementos: 1) plenas garantías a la libertad de expresión, 2) total libertad de asociación, 3) amnistía para los

¹⁷ Ciertamente es que en su discurso del 20 de mayo el presidente Bush le había exigido a La Habana elecciones libres, y no era un discurso cualquiera pues se pronunció en Miami al celebrarse el centenario de la república. Lo sorprendente, sin embargo, no fueron las exigencias ya habituales, sino el que se plantearan dentro del marco de la Constitución cubana: la referencia de Bush fue a las elecciones para la Asamblea Nacional a principios del 2003 y dijo que, si realmente eran libres, los Estados Unidos estarían dispuestos a un diálogo. Nunca antes había salido de Washington un reconocimiento de que el sistema político cubano podría ser punto de partida para los cambios. Por lo demás, no hubo el endurecimiento de la política de Washington esperado por sectores del Miami cubano.

¹⁸ *Granma*, 16 de mayo de 2002.

presos políticos, 4) derecho de los cubanos a formar empresas, y 5) una nueva ley electoral. La Asamblea pasó por alto la solicitud de referéndum sobre estos cinco puntos y la respuesta oficial al Proyecto Varela fue indirecta: la modificación constitucional que hace irrevocable el socialismo lo anulaba precisamente por antisocialista (si bien había que otorgarle carácter retroactivo a dicha modificación).

De cierta manera, los varelistas podían sentirse satisfechos por haber forzado al gobierno a reaccionar al extremo de las exaltadas movilizaciones y la precipitada alteración a la Constitución. Una respuesta menos estrepitosa –más institucional– hubiera sido que la Asamblea considerara el proyecto y dictaminara que simplemente no procedía un referéndum. ¿Por qué tanto afán vertido en rebatir a 11 000 ciudadanos y el empeño de una casi unanimidad ciudadana? ¿Cómo puede creerse que 99.7% de una comunidad humana esté de acuerdo en algo? El propósito de la maniobra, sin embargo, no era demostrar consentimiento, aunque la presencia de las masas sea parte integral de la exigencia oficialista respecto de la representatividad de la voluntad popular. Lo principal realmente era reafirmarle a todos –a los reformistas en el gobierno, a la oposición activa y latente, a los cubanos de a pie, al mundo– lo que ya se sabe: la máxima dirigencia no tiene voluntad alguna de cambio. Como las exigencias estadounidenses sobre las elecciones, esta renuencia no es nada nuevo. Lo novedoso es la encrucijada que La Habana tiene delante.

¿FIN DEL INMOVILISMO?

Es posible que la mirada retrospectiva confirme la hipótesis de que la pantomima reciente concluyó el ciclo iniciado a principios de los noventa. Para mediados de la década pasada, La Habana había fijado la reconstitución. El reforzamiento del embargo, mediante las leyes Torricelli y Helms-Burton, le permitió al gobierno seguir teniendo el papel de David contra Goliath a la par que la comunidad internacional se preguntaba por qué los Estados Unidos no cambiaban de política. Aunque frenadas en 1995, las reformas coadyuvaban a una recuperación económica moderada. Excepto por la crisis de los balseros en 1994 y el motín en el malecón habanero en 1995, la ciudadanía aparentaba calma. Aunque crecía y se extendía, la oposición activa era aún modesta. Mientras la población se mantuviera pasiva políticamente y la oposición limitada, el régimen no tenía que temer por su estabilidad. Por su parte, la dirigencia redobló su atención al PCC: una élite cohesionada había sido fundamental para desafiar los pronósticos de principios de los noventa y seguía siendo clave para seguir reteniendo el

poder. La reconstitución lograda, sin embargo, se basaba en un delicado equilibrio de factores nacionales e internacionales.

Incluso antes de que el socialismo se declarara irrevocable, el equilibrio ya empezaba a tambalearse. La visita de Carter sin duda contribuyó a la tendencia de que el mundo se pregunte cada vez con mayor insistencia por qué Cuba no cambia. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la economía ha retrocedido, como bien lo indican las bajas en el turismo y las remesas, la incertidumbre en el suministro de petróleo y el cierre de casi la mitad de los centrales azucareros. El Congreso estadounidense parece acercarse a un levantamiento de las restricciones a los viajes y al acceso a créditos para que Cuba compre alimentos a los Estados Unidos. Una moderación del embargo le restaría fuerza al síndrome de David-Goliat. La Habana tiene delante una encrucijada de tres caminos.

El primero sería seguir con las pautas de la “Gran Batalla de Ideas” pero bajando la intensidad de la reciente campaña. Este camino, sin embargo, posiblemente esté llegando a su fin. Desde el regreso de Elián, el tren de las movilizaciones no rueda con el mismo impulso: ahora depende de los “Cinco Héroes Cubanos Prisioneros del Imperio” –los espías que cumplen prisión en los Estados Unidos desde hace 18 meses– y su causa no resuena en los hogares cubanos como inicialmente lo hizo la de Elián. En lo económico se mantendría el *statu quo*, es decir, no se emprenderían reformas adicionales. Pero el problema es que la economía está de nuevo en picada y las medidas aplicadas ya dieron todo lo que podían dar. Por el contrario, si se consiguiera parar el descenso económico, aun sin medidas nuevas, el mantenimiento de un modelo *light* de movilizaciones sería más viable.

Aunque riesgoso, lanzar un nuevo frenesí de movilizaciones sería el segundo camino.

La dirigencia gobierna como si el teatro de los últimos años fuera realidad y no un *performance*. Además, como hasta ahora la ciudadanía ha participado del espectáculo sin contratiempos mayores, no hay razón para desecharlo. Pero el aguante popular no tiene por qué ser ilimitado. Las movilizaciones *in crescendo* bien pudieran convertirse en un bumerán si exigieran más allá de ese límite aún no fijado y que, posiblemente, no sea fácil de identificar por la élite reinante. Andando en esa dirección también pudiera producirse una nueva espiral de enfrentamientos con los Estados Unidos con sabe Dios qué resultados. En junio, las amenazas que Castró lanzó de cerrar la Sección de Intereses de los Estados Unidos y abrir las costas cubanas para la emigración fueron rápidamente disipadas por el propio gobierno.¹⁹ Así y todo, no se puede descartar el atractivo que tiene

¹⁹ De acuerdo con la ley Helms-Burton, los Estados Unidos considerarían la emigración

en el laberinto del comandante un escenario numantino. A él le es más fácil imaginarse una conclusión heroica que asumir las consecuencias de unas reformas profundas y verdaderas. Por suerte, el ejército probablemente sea un muro de contención ante esos delirios.

La tercera senda sería la de una reestructuración económica auténtica tipo China o Vietnam, lo cual implicaría reducir las movilizaciones, bajar el volumen propagandístico y colocar la economía en el centro de la política. Para empezar, habría que desempolvar las propuestas económicas encajonadas a mediados de los noventa. Eventualmente habría que enterrar de una vez y por todas la política de las movilizaciones. Pero a la máxima dirigencia en Cuba le es anatema convocar a la población sobre una plataforma de "pan con lechón" para todos: sería un deshonor a la dignidad de la patria. Aunque la más sensata, esta alternativa es la menos probable a corto plazo.

El verano de 2002 debió haber sido de preparación para el próximo congreso del PCC, que procedería en octubre. Se esperaba que entonces se aprobaran medidas económicas clave, especialmente en relación con las pequeñas y medianas empresas. Pero, hasta ahora, no se ha fijado fecha ni se han hecho públicos los documentos preparatorios. Incluso no hay certeza de que se hayan redactado. Luego de las sesiones extraordinarias para la modificación constitucional, la Asamblea suspendió su reunión ordinaria que debió celebrarse el 5 de julio de 2002. Si nos llevamos por los medios, los cinco prisioneros del imperio son un asunto nacional más urgente que el atolladero en que se encuentra el país. A puertas cerradas, sin embargo, es de suponer que la dirigencia esté enfrascada en una dura discusión.

Así lo sugiere la contundente noticia dada a principios de agosto: tres años después de su destitución, el ex canciller Roberto Robaina fue expulsado del Partido. En un video difundido a los militantes comunistas, el general Raúl Castro lo acusó de deslealtad al comandante, corrupción y autopromoción como el candidato de la transición. Respecto del último cargo, hizo referencia a una conversación grabada a fines de 1998 entre Robaina y el ex ministro español de Relaciones Exteriores, Abel Matutes, donde éste decía que el entonces canciller era su candidato. El general Castro igualmente sacó a relucir al también defenestrado Carlos Aldana, secretario ideológico del Partido hasta 1992, quien fuera acusado de querer ser el Gorbachov de Cuba. Cuando giraba en la cima, a Robaina se le atribuían visos reformistas y posiblemente tuviera ambiciones políticas ma-

descontrolada y masiva -como la que tuvo lugar desde el puerto de Mariel y la de 1994- como un acto de guerra.

yores. Aldana, por su parte, fue uno de los proponentes principales de una mayor apertura a principios de los noventa.

Si no es porque la realidad ha obligado a la dirigencia a retomar la discusión marginada a mediados de la década, ¿qué sentido tiene el haber desempolvado a Robaina y a Aldana? Lo ideal para el sector de los duros sería volver a la "Gran Batalla de Ideas" *light* y lograr una modesta recuperación sin tener que morder el cordobán de una reestructuración. ¿Podrán repetir el malabarismo del gatopardismo caribeño? Es posible, pero no probable.

Se dice que, hace una década, Raúl Castro y otros generales fueron a ver al comandante y le preguntaron si estaba dispuesto a dar la orden de desplegar al ejército por las calles cubanas. De no tomar las medidas que proponían, era ése un escenario casi inevitable, le dijeron. Aunque disgustadísimo, aceptó —a medias. Ahora toca la otra mitad. ¿Le pedirán otra cita los generales? Quizás hoy la situación sea más crítica aún no sólo por el agotamiento nacional y la creciente impaciencia internacional. Si bien todavía sin fecha, la sucesión está más cerca y la élite tiene que considerar no sólo sus intereses actuales, sino también los que tendrá después del velorio. De continuar, el inmovilismo podría afectar su futuro. Al mismo tiempo, a los que se pasen de la raya bien les pudiera aguardar hacerle compañía a Robaina y Aldana. ¿Podría peligrar la cohesión de la élite? Si así fuera, sería la primera vez en 43 años.

Y, claro, también está el tema de la población. Si bien es cierto que ésta le da prioridad a sus acuciantes problemas económicos, la cuestión de fondo no es sólo económica. Se trata igualmente de una sociedad abierta y libre, en fin, de la democracia, ya que sólo entonces sabremos cuál es la voluntad popular. Un inmovilismo continuado, o peor todavía el escenario de los delirios, podría provocar la revuelta popular que hasta ahora se ha evitado, y poner en peligro mortal lo que es deseable para todos en la isla y en el extranjero: la transición pacífica a una Cuba nueva.

CONCLUSIÓN

A los sucesores del comandante les esperan grandes retos y destacan dos a modo de conclusión. El primero tiene que ver con la cultura política de los últimos 43 años. El liderazgo entiende la política en términos marciales: llegó al poder por vía de las armas y con esa concepción ha gobernado. A diferencia de los antiguos países socialistas, el PCC no ejerce control civil sobre las fuerzas armadas. Por más de cuatro décadas, Castro ha gobernado en mayúsculas y con gran intensidad con base en su carisma y sus gran-

des pasiones históricas. Aunque hubo momentos en que la ciudadanía respondió a los llamados heroicos, los cubanos —como la inmensa mayoría de los seres humanos— se fijan más en las exigencias de la vida cotidiana que en los juicios de la historia. Un liderazgo político que reconozca ese hecho necesitaría poner en el centro de la política el bienestar de los gobernados y trazar un programa consecuente con ello. De ser así, el discurso político tendría que incorporar conceptos tales como la igualdad de oportunidades y la relación entre productividad y bienestar social, alejándose así del igualitarismo incondicional entronizado después de 1959. La élite cubana no tiene experiencia ejerciendo el poder con esa brújula que, si bien ineludible, puede entrañar consecuencias corrosivas para el mismo poder. De esto se desprende otro vacío: el no haberse fogueado con una *mentalité* de que hay vida fuera del poder.

El segundo reto tiene que ver con la normalización de las relaciones con los Estados Unidos. La soberanía nacional es uno de los pilares del legado revolucionario. Ciertamente las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba antes de 1959 acicatearon un marcado nacionalismo que no se encaminó por otros senderos después de la abrogación de la Enmienda Platt en 1934, como lo hicieron México y Washington a partir de la década de los cuarenta. Después de la Revolución, su propia radicalización, la Guerra Fría y, por último, el reforzamiento del embargo a partir de 1992 impidieron que ambos países desarrollaran las destrezas necesarias para la normalidad. En ese sentido, también los noventa son una década perdida, ya que se pudo haber adelantado en esa dirección si la pauta hubiera sido homologa a la de Vietnam y los Estados Unidos. No obstante, así será eventualmente y para lograrlo ambas partes tendrán que superar la mentalidad de fines del siglo XIX y principios del XX que ha enmarcado sus relaciones: el injerencismo de Washington y el concepto de soberanía de La Habana poco acorde con un siglo XXI que tiende a hacer borrosas las fronteras nacionales. Para los sucesores, por tanto, esto implica una nueva definición de patria y un reconocimiento de que la independencia absoluta no es hoy un discurso viable.